



Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Juzgado Civil Municipal
Madrid Cundinamarca
Calle 7ª N° 340 Piso 2
Tel: 0918254123

PROCESO	VERBAL SUMARIO
DEMANDANTE	ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA
DEMANDADA	SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ
RADICACION	2019 - 0554

Madrid, Cundinamarca. Diciembre dos (2) de dos mil veintiuno (2021).

En las condiciones que registra la actuación de la referencia, se definirá si la inasistencia de ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, su apoderada judicial Andrea del Rocio Guaque Díaz, el demandado SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y su apoderado Miguel A Fuentes Nuñez, a la audiencia del pasado veintisiete (27) de agosto, oportunamente fue justificada para impedir las sanciones del numeral cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, conforme el desinterés y la ausencia reseñados.

ANTECEDENTES

Por interpuesto apoderado judicial ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, demandó a SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ, promovió proceso VERBAL SUMARIO para obtener la resolución de un contrato de compraventa, el pago del saldo del precio, los perjuicios junto a las costas y gastos procesales que demande el presente proceso. El Juzgado asumió el trámite del proceso admitiendo la demanda, ordenó la notificación de la parte demandada, SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ, quien vinculada personalmente constituyó como apoderado judicial al abogado Miguel A Fuentes Nuñez, quien oponiéndose a las pretensiones propuso excepciones de fondo sustentadas en la ausencia del incumplimiento. Concentrada en debida forma la relación jurídico procesal, fueron convocadas las partes y apoderados a la audiencia inicial de trámite para surtir las etapas de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, para el tres (3) de septiembre, en cuya oportunidad fue abierta e instalada la audiencia decretada registrándose la inasistencia de ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, su apoderada judicial Andrea del Rocio Guaque Díaz, la parte demandada SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y su apoderado judicial Miguel A Fuentes Nuñez, que debió terminarse luego de aguardar su presencia durante un lapso prudencial. Al cabo del término dispuesto sin justificar el incumplimiento, el apoderado de la parte demandada Miguel A Fuentes Nuñez solicitó información sobre las razones por las que no se llevó a cabo la audiencia, mientras que la parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA solicitó el señalamiento de nueva fecha en cuanto omitieron notificarlo de la audiencia señalada y reconocerle personería a su apoderado, bajo cuyas condiciones se determinara su incidencia frente a la omisión censurada.

CONSIDERACIONES

Además de los propósitos procesales que le corresponde a la audiencia inicial, con su práctica se pretende asegurar los de la intermediación, la concentración, celeridad, publicidad y también los de la

conciliación, que constituyen etapas de obligatoria ocurrencia en cuanto propicia a las partes la posible solución amigable de los conflictos, garantiza una convivencia pacífica y posibilita en gran medida la descongestión de los Despachos Judiciales, pues indudablemente el diálogo y la concertación constituyen un mecanismo eficaz y expedito de acceso a una adecuada administración de justicia. En procura de tales propósitos se implantó en el proceso civil desde la reforma de 1989, la conciliación para obtener además de la descongestión, una solución directa de los conflictos, la intervención inmediata de las partes en una etapa procesal de forzoso cumplimiento en los procesos ordinarios de acuerdo a las directrices de los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso, que la reglamentó para cumplir actos procesales tan diversos como los relacionados con las medidas de saneamiento, la resolución de excepciones, la fijación de los hechos y pretensiones que requieren la presencia de las partes y sus apoderados, para materializar principios medulares como los de la eventualidad, la impulsión y la preclusión, característicos de un proceso que tiene prevista una asistencia obligatoria cuyo incumplimiento conlleva las sanciones que remedian la renuencia y desatención de tales postulados, a no ser claro está, que acrediten las situaciones paliativas que justifican esa conducta mediante prueba al menos sumaria si se aporta y solicita antes de la audiencia o de un hecho constitutivo de fuerza mayor y caso fortuito cuando lo reclama y acreditan con posterioridad a la audiencia, en los términos del artículo 372 del Código General del Proceso.

Las oportunidades procesales reconocidas a las partes y sus apoderados para justificar su inasistencia se condicionaron a las situaciones reguladas por los numerales tercero y cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso, erigiéndose como las únicas posibilidades y términos que permiten suspender las audiencias o excusar la inasistencia de las partes y sus apoderados, hasta reglamentarlas con los siguientes términos:

“... La audiencia se realizará aunque no concurra alguna de las partes o sus apoderados. Si éstos no comparecen, se realizará con aquéllas.

Si alguna de las partes no comparece, sin perjuicio de las consecuencias probatorias por su inasistencia, la audiencia se llevará a cabo con su apoderado, quien tendrá facultad para confesar, conciliar, transigir, desistir y, en general, para disponer del derecho en litigio.

3. Inasistencia. La inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia, por hechos anteriores a la misma, sólo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa.

Si la parte y su apoderado se excusan con anterioridad a la audiencia y el juez acepta la justificación, se fijará nueva fecha y hora para su celebración mediante auto que no tendrá recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento.

Las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, sólo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que ella se verificó. El juez sólo admitirá aquéllas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito y sólo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias procesales, probatorias y pecuniarias adversas que se hubieren derivado de la inasistencia.

En este caso, si el juez acepta la excusa presentada por una de las partes, la prevendrá para que concurra a la audiencia de instrucción y juzgamiento a absolver el interrogatorio.

4. Consecuencias de la inasistencia. La inasistencia injustificada del demandante hará presumir ciertos los hechos en que se fundan las excepciones propuestas por el demandado siempre que sean susceptibles de confesión; la del demandado hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión en que se funde la demanda.

Cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, ésta no podrá celebrarse, y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez, por medio de auto, declarará terminado el proceso.

Las consecuencias previstas en los incisos anteriores, se aplicarán, en lo pertinente, para el caso de la demanda de reconvencción y de intervención de terceros principales. Cuando se trate de litisconsorcio necesario las consecuencias anteriores sólo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes. Cuando se trate de litisconsorcio facultativo las consecuencias se aplicarán al litisconsorte ausente. A la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales...”

Tal reglamentación en manera alguna faculta a las partes y a sus apoderados para presentar excusas por motivos diversos a los descritos, tampoco para reclamar situaciones disímiles a las previstas y mucho menos para solicitarlas en oportunidades diversas a las señaladas. Bajo tales condiciones se verificara si las circunstancias reclamadas por el apoderado de la parte demandada y la parte demandante cumplen las exigencias y formalidades prescritas por el inciso segundo del numeral tercero de la citada disposición, el artículo 372 del Código General del Proceso, con las que antes que pretender justificar la inasistencia a la audiencia con posterioridad a la fecha y hora señalada para su práctica, únicamente solicitan nueva fecha para su práctica aspiración que impone examinar si las causas que reclaman configuran las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que son las únicas que tienen entidad para excusar el incumplimiento y la inasistencia censurada, en cuanto así lo restringió el legislador al señalar:

“...Las justificaciones que presenten las partes **o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, sólo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que ella se verificó. El juez sólo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito** y sólo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias procesales...” (Subraya y negrilla ajenas al texto).-

En cuanto a la situación del apoderado del demandado Miguel A Fuentes Nuñez, debe precisársele que ninguna justificación brindo para explicar su inasistencia y la de su representado, en cuanto desconociendo el trámite que registra el proceso, únicamente reclamó unas explicaciones que abiertamente desconoce el registro de la audiencia y evidencian la falta de control del trámite que tampoco da cuenta sobre la asistencia y diligencia reclamadas, pues ningún acto procesal da cuenta de su presentación a la misma o en oportunidad posterior, en consecuencia ni sus aseveraciones, como tampoco la falta de prueba sobre la presentación reclamada consolidan alguna causa o hecho que configure la fuerza mayor o el caso fortuito reglamentados como únicas causas que excusan su inasistencia a la audiencia señalada, porque de acuerdo a su versión su disposición ni está acreditada, como tampoco ofrece alguna circunstancia extraordinaria, intempestiva, inaplazable e impostergable que consolide la añorada situación de fuerza mayor o caso fortuito que exige el legislador como las únicas causas que excusan la inasistencia, ya que omite reportar y acreditar que un suceso extraordinario e imprevisto le impidió comparecer en la fecha y hora previamente señaladas para la práctica de la referida audiencia.

Frente a la posición de la parte demandante, cuyo abogada tampoco intervino, debe precisarse que en manera alguna tiene el Despacho obligación para notificarlo personalmente de la convocatoria a la audiencia, tampoco la inexistencia puede excusarse en la ausencia de reconocimiento de su apoderada ni mucho menos dicho acto explica el incumplimiento, en cuanto además de tratarse de un proceso verbal

sumario en el que se autoriza la intervención directa de las partes, descartadas las omisiones reclamadas, se advierte que ninguna de ellas constituye la fuerza mayor o el caso fortuito que justifiquen la inasistencia, pues de existir aquellas, en manera alguna determinaron la inasistencia en cuanto correspondían a un hecho conocido previamente por las partes frente a los que ninguna acción dispusieron para enmendarlas, descartándose el acaecimiento de un hecho sorpresivo e insuperable cuya ausencia impide concluir la justificación de la inasistencia, que en manera alguna, en lo expuesto, nunca intentaron o reclamaron las partes.

Sobre la falta de idoneidad que le corresponde a la intervención dispuesta sin justificar la inasistencia, debe indicarse que con posterioridad a la audiencia solo podían reclamarse circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, que son las únicas situaciones que de acuerdo a la reglamentación trascrita justifican la inasistencia y como ninguna de ellas concurre en la situación censurada al parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, la parte demandada SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y sus apoderados, quienes a pesar del conocimiento sobre la audiencia programada, ningún hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito acreditaron, por lo que asumirán la sanciones procesalmente dispuesta para tal comportamiento, porque a pesar de su conocimiento con la debida antelación de la fecha y la hora para la práctica de la diligencia que oportunamente se notificó al convocársela mediante providencia que se notificó desde el pasado veintisiete (27) de agosto, indudablemente se registró que su inasistencia e incumplimiento corresponden a la autónoma expresión de la voluntad y el libre albedrío en cuanto las partes y apoderados no solo omitieron justificarla sino que se abstuvieron de excusar su incumplimiento y explicarlo en la fuerza mayor o caso fortuito que el artículo 64 del Código Civil Colombiano, establece con los siguientes términos:

“...Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

Conforme tal marco normativo, el caso fortuito aparece constituido por el hecho humano imprevisible pero resistible, mientras que la fuerza mayor corresponde a circunstancias, acontecimientos o sucesos extraños al comportamiento del hombre que resultan ajenos a su voluntad y se materializan en forma imprevisible, es decir que dentro de las circunstancias normales de la vida, era imposible anticipar su ocurrencia y razonablemente no puede preverse por ser anormal y extraordinaria, y de forma irresistible, siempre que no puede evitarse ni superarse sus consecuencias. Jurisprudencialmente dichas figuras son consideradas como eximentes de responsabilidad únicamente cuando se ajustan a las siguientes condiciones:

“...A dicho propósito, concebida la “fuerza mayor o caso fortuito” (casus, casus fortuitus, casus fortuitum, casus maior, vis maior, vis divina, vis magna, vis cui resisti non potest, vis naturalis, fatum, fatalitas, sors, fors, subitus eventus, inopinatus eventus, damnum fatale, detrimentum fatale, damnum providential, fuerza de Dios, D. 19, 2, 25, 6; nociones aunque “distintas” [Cas. Civ. de 7 de marzo de 1939, XLVII, 707], simétricas en sus efectos [cas.civ. de 26 de mayo de 1936, XLIII, 581 y 3 de agosto de 1949, G.J, No. 2075, 585]), cuanto “...imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un

terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." (art. 1º, Ley 95 de 1890), es menester para su estructuración ex lege la imprevisibilidad e irresistibilidad del acontecer (cas. civ. sentencias de 31 de agosto de 1942, LIV, 377, 26 de julio de 1995, exp. 4785, 19 de julio de 1996 expediente 4469, 9 de octubre de 1998, exp. 4895).

La imprevisibilidad del acontecimiento, concierne a la imposibilidad de prever, contemplar o anticipar ex ante las circunstancias singulares, concretas o específicas de su ocurrencia o verificación de acuerdo con las reglas de experiencia, el cotidiano, normal o corriente diario vivir, su frecuencia, probabilidad e insularidad in casu dentro del marco fáctico de circunstancias del suceso, analizando in concreto y en cada situación los referentes de su "normalidad y frecuencia", "probabilidad de realización" y talante "...intempestivo, excepcional o sorpresivo" (cas.civ. sentencias de 5 de julio de 1935, 13 de noviembre de 1962, 31 de mayo 1965, CXI-CXII, 126; 26 de enero de 1982, 2 de diciembre de 1987, 20 de noviembre de 1989, 7 de octubre de 1993, 23 de junio de 2000, [SC-078-2000], exp. 5475 y 29 de abril de 2005, [SC-071-2005], exp. 0829-92).

La irresistibilidad, atañe a la imposibilidad objetiva absoluta de evitar el suceso y sus consecuencias (cas. civ. sentencia de 26 de noviembre de 1999, exp. 5220), "de sobreponerse al hecho para eludir sus efectos" (cas.civ. sentencia de 31 de mayo de 1965, CXI y CXII, 126) por "inevitable, fatal, imposible de superar en sus consecuencias" (cas.civ. sentencia de 26 de enero de 1982, CLXV, 21), contenerlas, conjurarlas, controlarlas o superarlas en virtud de su magnitud, "que situada cualquier persona en las circunstancias que enfrenta el deudor, invariablemente se vería sometido a esos efectos perturbadores, pues la incidencia de estos no está determinada, propiamente, por las condiciones especiales –o personales- del individuo llamado a afrontarlos, más concretamente por la actitud que éste pueda asumir respecto de ellos, sino por la naturaleza misma del hecho, al que se le son consustanciales o inherentes unas específicas secuelas" (cas.civ. sentencia de 26 de julio de 2005,[SC-190-2005], exp. 050013103011-1998 6569-02) o lo que es igual, entiéndase como "aquel estado predicable del sujeto respectivo que entraña la imposibilidad objetiva de evitar ciertos efectos o consecuencias derivados de la materialización de hechos exógenos -y por ello a él ajenos, así como extraños en el plano jurídico- que le impiden efectuar determinada actuación, lato sensu. En tal virtud, este presupuesto legal se encontrará configurado cuando, de cara al suceso pertinente, la persona no pueda -o pudo- evitar, ni eludir sus efectos (criterio de la evitación)". (Cas.civ. Sentencia de 23 de junio de 2000, [SC-078-2000], exp. 5475)..."¹.

El anterior marco conceptual determina la inexistencia de la fuerza mayor o el caso fortuito que como únicas circunstancias justifican la inasistencia de las partes y sus apoderados a la audiencia convocada, las que tampoco pueden declararse a consecuencia del silencio en que incurrió la apoderada Andrea del Rocio Guaque Díaz de la parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA y la parte demandada SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ, cuya omisión determinó que se desconozcan los motivos que les impidieron comparecer y frente a los restantes sujetos procesales, se reseñaron las falencias que frustraron su intención de justificar la inasistencia, en consecuencia, tanto las partes demandante y demandado como sus apoderados tenían pleno conocimiento de la citación y las sanciones que generaba su inasistencia, voluntaria, negligente, culposa y deliberada por la que se abstuvieron de acreditar alguna de las causales que los exonera de responsabilidad, para concluir que abandonaron el trámite y sin ningún interés en el propósito de justificar su incumplimiento, carece el Despacho de la prueba de actos y circunstancias que impiden declarar que en su favor se materializó un acto invencible, ajeno a su actuación, irresistible e imprevisible de aquellos que configuran la fuerza mayor o el caso fortuito que son los únicos acontecimientos que justifican la inasistencia a la audiencia inicial del tres (3) de septiembre, bajo cuyas condiciones de ninguna manera puede relevárselos de la sanciones procesales y patrimoniales que para dicha omisión señaló el legislador.

¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN CIVIL. Magistrado Ponente: WILLIAM NAMÉN VARGAS. 24 de junio de 2009. Referencia: Exp. 11001-3103-020-1999-01098-01. Proceso ordinario de la Compañía Agrícola de Seguros S.A. contra Transportes San Marcos Ltda.

Correspondía a la parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, su apoderado Andrea del Rocio Guaque Díaz, el demandado SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y su apoderado judicial Miguel A Fuentes Nuñez, atender la citación dispuesta para la audiencia del tres (3) de septiembre, señalada desde el pasado veintisiete (27) de agosto, que se les notificó por anotación en el estado N° 153 del 30 siguiente, que los convocados no solo incumplieron sino que dejaron de justificar su omisión, privándose de reclamar la fuerza mayor o el caso fortuito que explicara su inasistencia a la citada audiencia, respecto de la parte demandante y su apoderado, mientras que el demandado y su apoderado fracasaron en su aspiración de acreditar la justa causa.

Conforme los términos que relaciona el proceso, la parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, su apoderada Andrea del Rocio Guaque Díaz, la parte demandada SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y su apoderado judicial Miguel A Fuentes Nuñez, en la forma expuesta incumplieron la citación, se abstuvieron de explicar y justificar su inasistencia en forma previa a la diligencia, y con posterioridad a ella igualmente omitieron acreditar que una situación de fuerza mayor o caso fortuito les impidió asistir, apartándose de la justa causa que explique la inasistencia a diligencia señalada para las 8:00 de la mañana del tres (3) de septiembre, por lo que el Despacho, en ausencia de la prueba correspondiente a una causa extraordinaria, insuperable, fortuita o de fuerza mayor no puede relevarlos del pago de la multa que debe imponérseles por mandato expreso del numeral 4° del artículo 372 del Código General del Proceso. Como oportunamente lo registró el Despacho, ni al inicio de la diligencia como tampoco con posterioridad a ella, los convocados acreditaron el supuesto extraordinario requerido para explicar el incumplimiento de sus obligaciones, desconociendo el perentorio mandato de los numerales tercero y cuarto del artículo 372 del Código General del Proceso.

El principio de preclusión impide repetir las etapas procesales y los actos ya concluidos, y como en estos asuntos el Juez despliega unas facultades oficiosas que de ninguna manera están supeditadas a la presencia de las partes y sus apoderados, la audiencia se instaló a pesar de su inasistencia porque antes de ella no se acreditó ninguna causal que impidiera practicarla a pesar de la inasistencia de la parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, su apoderada Andrea del Rocio Guaque Díaz, la parte demandada SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y su apoderado judicial Miguel A Fuentes Nuñez, quienes como tampoco se excusaron ni justificaron su ausencia al dejar de invocar una causa fuerza mayor o caso fortuito o acreditarla en las condiciones relacionadas, asumirán las sanciones de orden patrimonial y procesal con las que el legislador proscribiera ese comportamiento. Así las cosas, como omitieron justificar la inasistencia, ninguna causal legal concurre para exonerarlos de las sanciones dispuestas para un acto procesal que no debe suspenderse y aplazarse sin justa causa, fuerza mayor o caso fortuito ya que ni las partes ni sus apoderados solicitaron ni acreditaron las condiciones de los numerales 3° y 4° del artículo 372 del Código General del Proceso que perentoriamente establece que “la inasistencia de las partes o de sus apoderados a esta audiencia, por

hechos anteriores a la misma, sólo podrá justificarse mediante prueba siquiera sumaria de una justa causa. (...) Las justificaciones que presenten las partes o sus apoderados con posterioridad a la audiencia, sólo serán apreciadas si se aportan dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que ella se verificó. **El juez sólo admitirá aquéllas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito...**” proceder incumplido que determina apropiado que se le imponga la sanción, porque la parte demandante ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA, su apoderada Andrea del Rocio Guaque Díaz, la parte demandada SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ y su apoderado judicial Miguel A Fuentes Nuñez, no solo se abstuvieron de comparecer a la audiencia inicial convocada, sino que omitieron justificar la causa de tal incumplimiento y como ninguna excusa constitutiva de fuerza mayor y caso fortuito acreditaron, conforme el numeral 4° del artículo 372 del Código General del Proceso la asumirán las sanciones allí dispuestas, bajo cuyo entendimiento el **JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA**, por autoridad de la Ley

RESUELVE

DECLARAR TERMINADO, en las condiciones del inciso segundo del numeral 4° del artículo 372 del código general del proceso, el presente proceso VERBAL SUMARIO que ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA mediante apoderada judicial promovió contra SANDRA PATRICIA ESCOBAR VELASQUEZ, a consecuencia de su inasistencia injustificada y sus apoderados, emítanse las constancias con constancia plena de su ejecutoria y cancelense las cautelas adoptadas en el presente proceso.-

NEGAR la solicitud de nueva fecha planteada por la ALBEIRO CHAVEZ BARBOSA y el apoderado Miguel A Fuentes Nuñez, conforme las razones expuestas al motivar la presente determinación.

En las condiciones del inciso segundo del numeral 4° del artículo 372 del Código General del Proceso, emítanse las constancias y la reproducción de las copias auténticas de esta providencia para su cobro coactivo de ser necesario, con constancia plena de su ejecutoria. -

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

El Juez

JOSÉ EUSEBIO VARGAS BECERRA

Firmado Por:

Jose Eusebio Vargas Becerra

Juez Municipal

Juzgado Municipal

Civil 001

Madrid - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**9d69242f7c257b3ec61b596e53c501ef189bff3c849241
e99e98303fd393d7d9**

Documento generado en 03/12/2021
07:25:33 AM

**Valide este documento electrónico en la
siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**